

Documento N° 5

Serie: Contextos
subregionales

Dinámicas del Conflicto Armado en el Sur de Córdoba

Franklin Martínez Martínez
Yiseth Irreño Quijano

Dinámicas del Conflicto Armado en el Sur de Córdoba

Yiseth Irreño Quijano* Franklin Martínez Martínez**

Abril de 2018

Índice

1. Condiciones geográficas, socioeconómicas e institucionales	2
2. Dinámicas del conflicto 1960-2017	4
3. Dinámicas recientes del conflicto armado en el territorio	9
4. Referencias	11

*Estudiante de Ciencias Políticas y Gobierno con Énfasis en Políticas Públicas. Universidad del Norte.
Contacto: Yirreno@uninorte.edu.co

**Politólogo con Énfasis en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad del Norte. Asistente UN-Caribe. Contacto: fdmartinez@uninorte.edu.co

El siguiente trabajo busca describir las dinámicas del conflicto armado en el sur de Córdoba, enfocándose en dos puntos fundamentales: el primero, las condiciones geográficas, socioeconómicas e institucionales del sur de Córdoba; y el segundo, la historia de la confrontación armada en el territorio desde los años 60 hasta el año 2017.

1. Condiciones geográficas, socioeconómicas e institucionales

El departamento de Córdoba es uno de los 32 departamentos de Colombia que, junto con Bogotá, conforman la división político-administrativa del país. Está ubicado al norte del país, en la región Caribe, limitando al norte con el Océano Atlántico, al este con los departamentos de Sucre y Bolívar, y al sur y oeste con el departamento de Antioquia.

De acuerdo con la Gobernación de Córdoba, el departamento puede ser dividido en dos grandes regiones: la primera, de tierras planas o ligeramente onduladas en donde se localizan los valles de los ríos Sinú y San Jorge y se concentran la mayoría de los municipios, en la cual se encuentran las subregiones del Alto Sinú, Sinú Medio, Centro, Costa, Sabanas, Ciénagas, y San Jorge; la segunda, al sur del departamento, montañosa, con relieves pertenecientes a las Serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel – prolongaciones de la Cordillera Occidental. Es en esta subregión en que se encuentra el Parque Nacional Natural (PNN) Nudo de Paramillo, reserva natural que ha estado en el centro del conflicto armado en los últimos 50 años dada su biodiversidad, teniendo bosques secos de llanura, selvas húmedas, cimas como la del Paramillo del Sinú, una de las mayores concentraciones de fauna y flora nativa del norte de Suramérica, y el lugar de nacimiento de los ríos Sinú y San Jorge.

Administrativamente, esta subregión está compuesta por los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta, Valencia y San José de Uré. sus actividades económicas son principalmente la ganadería y la agricultura, complementadas con la pesca que se presenta en las ricas fuentes hídricas que la bañan, Río Sinú y San Jorge. Así mismo, el 16 por ciento de la población es afrodescendiente, una de las más altas del departamento (Plan de Desarrollo 2016-2019 del departamento de Córdoba).



Fuente:

<https://sogeocol.edu.co/cordoba.htm>

Por otro lado, esta zona presenta un alto Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) (ver Tabla 1), lo cual está ligado a dos factores: el conflicto armado, ya que ha sido escenario de violencia con presencia de guerrillas y estructuras paramilitares; y el abandono institucional, que ha impedido llevar desarrollo y solventar las necesidades a los habitantes de la zona. En municipios como Tierralta y Valencia el porcentaje de NBI están en el orden del 75 por ciento, doblando los valores promedio del departamento (Plan de Desarrollo 2016-2019, Córdoba).

MUNICIPIO	PORCENTAJE DE PERSONAS CON NBI EN CABECERA	PORCENTAJE DE PERSONAS CON NBI EN RESTO	PORCENTAJE DE PERSONAS CON NBI TOTAL
Montelibano	41,14	68,94	45,11
Puerto Libertador	51,20	73,14	64,41
Tierralta	52,78	88,29	73,29
Valencia	58,00	86,41	76,17
San José de Uré	68,55	81,99	72,53

Tabla No. 1, Fuente: DANE, 2005.

MUNICIPIOS	EFICACIA 2016	EFICIENCIA 2016	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FISCAL	FISCAL	CAPACIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR DE DESEMPEÑO INTEGRAL	RANGO DE CALIFICACIÓN	GATEOGORÍA MUNICIPAL
Montelibano	81,36	59,01	79,67	81,39	73,58	89,19	75,36	Satisfactorio	6
Puerto Libertador	98,67	53,59	72,7	78,47	69,25	87,69	75,86	Satisfactorio	6
Tierralta	73,83	60,14	0,57	73,44	70,45	76,44	51,99	Bajo	6
Valencia	91,64	46,54	87,59	75,28	68,76	81,79	75,26	Satisfactorio	6
San José de Uré	77,67	36,38	35,52	75,79	60,59	90,98	56,34	Bajo	6

Tabla No. 2, Fuente: DNP, 2017.

2. Dinámicas del conflicto 1960-2017

La violencia en el sur de Córdoba data desde antes que se conformara jurídicamente el territorio como departamento. Han sido conflictos constantes donde se han visto involucrado diferentes actores.

Durante la primera mitad del siglo XX, el conflicto se dio entre colonos

campesinos liberales y grandes terratenientes conservadores, donde el problema de la tierra y las promesas no cumplidas del Estado a los campesinos fueron ejes de la confrontación. Lo anterior creó un ambiente que facilitó la presencia y aparición de la guerrilla del EPL hacia 1967, pero no fue el único grupo al margen de la ley que ejerció su poder en esta zona. Junto a este, las FARC – hasta su desmovilización, narcotraficantes y estructuras paramilitares han hecho presencia en la zona por más de 50 años.

El EPL hace presencia en el sur del departamento de Córdoba hacia 1967, como brazo armado del Partido Comunista-Leninista. Se ubicaron en los límites entre Antioquia y Córdoba, y entró en relación con movimientos sindicales y estudiantiles, alcanzando una presencia considerable en el departamento en la década de 1960 y parte de 1970 (MOE, 2007). Su centro de despliegue de acciones militares fue el Nudo de Paramillo, donde años más tarde se crearía el Parque Nacional del mismo nombre.

Su estrategia fundamental fue la de desarrollar la lucha armada en zonas rurales, dentro de una concepción de guerra popular prolongada, buscando la conformación de una base de apoyo campesina (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2009). De hecho, ante su presencia en el territorio, el Ejército Nacional crearía la Brigada XI para contrarrestar el control territorial guerrillero (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2007).

El Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH de la Vicepresidencia de la República (2009) plantea que el surgimiento del EPL se da en una coyuntura particular, relacionada con la reforma agraria que, impulsada por la Ley 135 de 1961, apoyó la conformación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) – organización que logró la adjudicación de miles de predios en todo el país, pero que no alcanzó los objetivos previstos en la ley. Otro elemento fue la radicalización de los movimientos estudiantiles, especialmente en las universidades públicas, y el crecimiento de las movilizaciones la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), lo cual sería clave para la conformación y fortalecimiento de la guerrilla del EPL en el sur del departamento de Córdoba (Negrete, 2008).

Siguiendo a Negrete (2008), la disidencia del Partido Liberal que dirigía el expresidente Alfonso López Michelsen, mostró una postura a favor de todas estas acciones. Este grupo lo conformaban reconocidos profesionales y dirigentes nacionales, como Rafael Yancés, Antonio Brunal Echenique, Hernando Santos, Eduardo Pastrana, Jorge León y García y Edilberto Kerguelén, quienes a través de sus clases y cátedras mostraban posiciones favorables a tales acciones. Podría afirmarse que la oposición al EPL, en el departamento de Córdoba, no llegaría sino hasta el surgimiento de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2009).

Así,

Hasta 1975 únicamente se encontraba consolidado el frente Francisco Garínica, que se ubicó en las cabeceras de los ríos Sinú y San Jorge. En 1976, nació en el Urabá el comando urbano Pedro León Arboleda, y en ese mismo año, el comandante del quinto frente de las Farc, Bernardo Gutiérrez, desertó y pasó al EPL junto con veinte de sus hombres. Entre 1975 y 1980, se presentó una crisis aguda en el movimiento guerrillero por divisiones internas, al tiempo que muchos cuadros políticos

del PCML fueron arrestados en Urabá, Córdoba y otros sitios; tanto el partido como el EPL, quedaron debilitados. (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2009, p. 94)

Por su parte, la guerrilla de las FARC se sitúa desde mediados de los sesenta hasta su desmovilización, inicialmente con presencia de dos frentes: el Frente 18, que hizo presencia en área del municipio de Tierralta, río San Jorge y Llanos del Tigre; y el Frente 58, ubicado en Tierralta, en las riberas del río Esmeralda, en Batatas, La Resbalosa, Río Verde, Guadual, Alto Joaquín, y el suroccidente del mencionado municipio. Posteriormente, el Frente 5, que tuvo presencia en Tierralta, ríos Esmeralda y Verde; y el Frente 36 en Puerto Libertador, Montelíbano y riberas de los ríos San Jorge y Río Sucio (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2007, p.3). “La idea era que, al instalar los frentes en los lugares escogidos, debían fortalecerse, crecer y posteriormente desdoblarse en otros frentes, multiplicarse en personal y en armas, lo mismo que en cuanto a apoyo de la población” (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2009, p. 93).

Las guerrillas que se encontraban en este territorio desplegaron diferentes acciones, entre estas, secuestros, enfrentamientos con Fuerza Pública, y violencia localizada hacia grandes terratenientes. Como lo muestra el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH (2009), “. . . de cuatro secuestros en 1980, se pasa a 11 en 1983 y a 25 en 1984, de acuerdo con los registros disponibles. En su mayoría, fueron llevados a cabo por el EPL”.

Durante la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986) se llevó a cabo la negociación de paz entre las guerrillas de las FARC y EPL, con lo cual se abrió espacio para que estas guerrillas montaran sus movimientos políticos: las FARC, con la Unión Patriótica, y el ELN con el Frente Nacional. Sin embargo, hubo una fuerte oposición por parte de ganaderos, terratenientes y en general de la élite local, argumentando a favor de la continuación de la guerra, todo esto en un contexto en el que los secuestros iban en aumento, y las guerrillas continuaban extorsionando y combatiendo (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2009). Las políticas de paz del entonces presidente Betancur, continuadas por su sucesor, Barco, fallaron: la violencia en el sur de Córdoba siguió aumentando, de la mano con el accionar de las guerrillas. Esto se evidencia, por ejemplo, en el aumento de secuestros año a año: en 1985, ocurren 13; en 1988, 18; en 1989, 44; y en 1990 43. Los enfrentamientos entre las guerrillas y la Fuerza Pública también aumentaron, pasando de 11 en 1985 a 55 en 1988 (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2009).

Durante este periodo, las FARC también se expandieron por el sur de Córdoba, a través del Frente 5, el Frente 58 y el Frente 18. En 1989, junto con el EPL, por medio de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, hacen una toma al municipio de Tierralta: las FARC se tomaron la Caja Agraria y la estación de Policía, al tiempo que el EPL emboscó a un grupo de militares. (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2009).

Al mismo tiempo, los narcotraficantes comenzaron a tener mayor incidencia en la zona. El departamento de Córdoba, de hecho, ya era una zona de contrabando de bienes y marihuana antes de la llegada de estos. Según el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH (2009), “. . . la bonanza de la marihuana tuvo especial impacto en las regiones del Alto Sinú y el Alto San Jorge y aprovechó a su turno las redes de contrabando existentes entre la zona costera, la Isla Fuer-

te y Panamá” (p. 94). Precisamente, estas características del Alto Sinú influyeron en la decisión de los grandes narcotraficantes de ubicarse en esta zona del departamento, en la cual, además, se encontraba el Parque Nacional Natural Paramillo, con más de 300.000 hectáreas en el sur del departamento, aislado geográficamente y administrativamente, y con la debilidad e indiferencia propia de las administraciones y autoridades locales (Negrete, 2008).

Es curioso que, en un principio, existieran alianzas entre grupos armados – como el EPL, y los narcotraficantes. Esta fue muy provechosa para ambos, dado que por un lado, el EPL recibía un impuesto por avioneta cargada, que podía ser dinero o en especie (armas, medicamentos y provisiones); y por el otro, los narcotraficantes permitían las operaciones y le brindaban cierta seguridad por estar en territorio bajo su control (Negrete, 2008).

Sin embargo, las condiciones cambiarían dadas las extorsiones a ganaderos, la quema de sus fincas y el robo y asesinato de animales. Ni siquiera durante la negociación, como se mostró anteriormente, tales cifras disminuyeron. Ante tal situación, a mediados de la década de los 80, “los jefes paramilitares Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil, llegaron al Alto Sinú. . . , donde fundaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá” (MOE, 2007, p. 4). La violencia en el territorio se vería intensificada, aumentando los enfrentamientos y víctimas por la violencia en todo el departamento de Córdoba, pero sobre todo en las zonas de confluencia de ambos grupos armados. (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2007). Así, a partir de 1988, las autodefensas empiezan a expandirse por el sur de Córdoba, aun a pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional por desmovilizar a los hombres de Fidel Castaño en 1991.

Muchos de los miembros del FN y UP fueron asesinados, este último siendo exterminado casi totalmente. Una muestra de ello es que, en 1989, “la base del Observatorio registró otros 17 casos de homicidios de dirigentes políticos y populares, de ellos 6 de la UP y 4 del FP, que fueron atribuidos en su mayoría a las autodefensas” (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2009, p. 113). El 3 de agosto de este mismo año, sería asesinado en Montería a Gustavo Guerra Doria, coordinador de la Unión Patriótica en el departamento de Córdoba (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2009).

En los 90, la ola de violencia produciría diversos desplazamientos en la zona, aun a pesar de que en 1991 el EPL se encaminaba a la desmovilización – firmada en febrero de este año, y que algunas estructuras paramilitares habían sido neutralizadas por el Gobierno. Hubo también una disminución en la tasa de homicidios, pasando “. . . de 590, a 429 en 1991, a 401 en 1992, a 398 en 1993 y a 299 en 1994” (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2009, p. 119). Sin embargo, dado que las FARC y el ELN intentarían ocupar los espacios que habían tenido presencia de grupos armados, en 1993 las autodefensas comenzarían a contraatacar, buscando también evitar la consolidación electoral de la Unión Patriótica en la subregión (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2007).

Así,

. . . las acciones de las AUC se desplegaron a través de 4 bloques: el bloque Córdoba, con Salvatore Mancuso como líder en todo el departamento;¹⁸ el bloque Héroes de Tolová dirigido por Diego Murillo alias Don Berna, con centro de acción

en Valencia; el bloque Mineros, al mando de alias Cuco Vanoy actuando en Puerto Libertador, Montelíbano, la Apartada y Ayapel y el bloque Élder Cárdenas, coordinado por alias el Alemán, actuando en los municipios de Canalete, Los Córdoba, Arboletes y San Juan de Urabá Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2007, p.4) Las ACCU se consolidan en 1994 con el liderazgo de Carlos Castaño, que pasó a tomar el mando después de la muerte de su hermano Fidel Castaño (MOE, 2007). A partir de ahí empezaron su expansión tanto en Córdoba como en el resto del país. Las ACCU se caracterizaron por tener cabecillas locales, entablando relaciones con estos y articulándose a otras estructuras criminales, ampliando así sus influencias hacia otras regiones. A partir de 1997 lo hicieron bajo la organización Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la cual Salvatore Mancuso se volcó a hacer fuerte presencia en Córdoba y en la región del Catatumbo. El narcotráfico fue, sin lugar a dudas, el principal combustible financiero de las AUC, soportando la expansión territorial de la organización (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2009).

Es entonces como el Nudo de Paramillo se volvió uno de los escenarios de conflicto y disputa de estos grupos armados. En 1997, la ofensiva de las ACCU para tomar control de esta subregión se tradujo en asesinatos, masacres y desplazamientos. La violencia en este nudo, se tradujo en cinco masacres en Tierralta y una en Puerto Libertador (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2002). Por otro lado, la sociedad civil no se escapó de ser objeto blanco de estos grupos. Una muestra de esto fue el hecho ocurrido “en junio de 1999, 60 miembros de las AUC asesinaron a 13 personas en Saiza, en el municipio de Tierralta, hirieron a dos más, quemaron doce locales comerciales al igual que dos viviendas y hurtaron víveres” (Verdad Abierta, 2008), hecho que produjo el desplazamiento de aproximadamente 400 personas. Las AUC también atacaron a los indígenas y a los campesinos, provocando un alza en los secuestros y desplazamientos de la población durante el año 2000. (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República, 2009. pág. 140).

En noviembre de 2002 las AUC y el Gobierno Nacional, empiezan las negociaciones de paz, para la desmovilización. Sin embargo, esto no significó una disminución en las acciones armadas. Para el 2003 los combates entre el Estado y los grupos al margen de la ley se intensificarían, seguidos de la Operación Motilón (2004), dirigida a los Frentes 18 y 34 de las FARC; y la Operación Escorpión, contra los Frentes 5, 18 y 58, narcotraficantes y grupos emergentes (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2007).

De hecho, en cifras de desplazamiento en el sur de Córdoba, Tierralta arrojó 5.946 desplazados en 2001 y 3.650 más en 2002; en Valencia, fueron 3.905 y 2.681 respectivamente; en Puerto Libertador 1.390 y 2.409, y en Montelíbano, 2.408 y 2.912 (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República, 2009, p. 140)

No sería sino hasta finales de 2004 y principios de 2005 que iniciaría la desmovilización del bloque de Córdoba. “En enero de 2005 se desmovilizaron 925 hombres pertenecientes al bloque Córdoba en Santa Fé de Ralito (Tierralta); en junio del mismo año, 464 hombres del bloque Héroe de Tolová dejaron sus armas en la vereda Rusia Ocho (Valencia) (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2007, p. 5). Para 2007, la cifra de desmovilizados atendidos en el departamento de Córdoba era de 3.608 desmovilizados de los cuales, 3.376 se ubi-

can en los municipios de Montería, Tierralta, Valencia, Montelíbano, Planeta Rica, Cereté, Loricá, Ciénaga de Oro, La Apartada, Sahagún, y Puerto Libertador (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH., 2007).

Los territorios abandonados por las AUC no fueron ocupados por la presencia institucional. Así que no tardaron en convertirse escenario de disputa por las FARC, narcotraficantes y otros grupos emergentes. Estos últimos provendrían de las mismas AUC, bajo otros nombres y liderados por mandos medios, conservando en muchos casos sus vínculos con el narcotráfico, rutas, cultivos, armas, y, sobre todo, control del territorio.

En cuanto a las FARC, tenían también fuerte presencia en el sur de Córdoba, dándose una fuerte confrontación armada entre esta y las bandas emergentes de paramilitares. En muchos casos, sería esta la que controlaría las rutas de exportación de la cocaína, manejando además los cultivos (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República, 2009, p. 187).

Debido a la desmovilización de las FARC y su paso a la vida civil, los grupos armados organizados – herederos de las UAC, han tratado de controlar el territorio dejado por esta.

3. Dinámicas recientes del conflicto armado en el territorio

En la actualidad, la población del sur de Córdoba se ve afectada por los enfrentamientos entre los grupos armados organizados (GAO), y el continuo asesinato de líderes sociales, lo cual sigue generando desplazamiento y miedo entre sus habitantes (Serrano, 2018; UNCaribe, 2018). De hecho, se han reportado casos de niños reclutados por Los niños, según un reporte del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) citado por el diario El Universal (2012), están siendo reclutados por GAO.

En San José de Uré se encuentran “las estructuras armadas de los autodenominados frentes Rubén Darío Ávila, Francisco Morelos Peñate y Julio Cesar Vargas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia contra las estructuras armadas del autodenominado frente Virgilio Peralta Arenas, más conocidos como “Los Caparrapos”, en alianza con la organización armada ilegal “Los Paisas” (Serrano, 2018). Del mismo modo, el Clan del Golfo, el ELN, y algunos grupos armados contratados por carteles mexicanos, hacen presencia en el sur de Córdoba.

Un caso particular es el del municipio de Tierralta. El 30 de noviembre de 2017, su alcalde argumentó que los constantes enfrentamientos entre GAO en su territorio se deben a la gran cantidad de cultivos de coca en la zona. Tales acciones han resultado en el desplazamiento de más de 190 familias indígenas del Alto Sinú, debido al fuerte enfrentamiento entre GAO y Fuerza Pública.

En términos generales, podría decirse que el Sur de Córdoba es de las regiones más violentas del país. A continuación, un recuento de las acciones armadas realizadas en lo corrido del año 2018, recopiladas por El Universal (26 de febrero de 2018).

- El 18 de enero fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Mira San Pedrito, hecho que atribuyó a los Caparrapos. Posterior a este hecho se citó a las personas de la vereda a que se marcharan porque el territorio iba a hacer escenario de disputa. Por lo cual, 143 familias integradas por 385 personas, se desplazaron masivamente hacia San José de Uré, entre ellos 25 hogares de indígenas Embera Katíos de la parcialidad Dochama.
- En ese mismo mes, en el corregimiento de Versalles, miembros de las Auto-defensas Gaitanistas de Colombia abordaron a la líder comunitaria Diana Dorado, miembro de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba y le dieron media hora para desplazarse, dado que de lo contrario sería asesinada.
- El 31 de enero presuntos miembros de la estructura armada “Los Caparrapos”, portando armas largas, llegaron hasta la vivienda del tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Ilusión, corregimiento Batatalito, Antonio María Vargas Madrid, y lo asesinaron delante de su familia.
- El 18 de febrero anterior un grupo compuesto por aproximadamente 12 individuos, que portaban armas largas, ingresaron a la vereda El Cerro, donde se ubica el cabildo indígena Zenú Raizal, luego de presentarse como miembros del grupo armado ilegal Los Paisas, aunque posteriormente se supo que pertenecían a las AGC
- El 19 de febrero miembros de Los Caparrapos y de las AGC, sostuvieron dos enfrentamientos con armas largas sobre la vía que une a los corregimientos de Versalles y Brazo Izquierdo.
- El 22 de febrero de 2018, en horas de la mañana, fue asesinado un hombre conocido con el alias de ‘Pitufo’ en la vereda Viera Abajo, zona rural de San José de Uré, Córdoba. La comunidad indicó que al sitio llegaron hombres fuertemente armados y le quitaron la vida.

Del mismo modo, de acuerdo a la información publicada por UNCaribe (2018),

1. El 25 de enero de 2018, Mario Carrascal Náder, exalcalde de Puerto Libertador, fue asesinado en zona rural entre Montería y San Carlos, posiblemente dados sus problemas en la alcaldía por la presencia de Grupos Armados Organizados.
2. El 2 de febrero de 2018, Antonio Vargas Madrid, líder campesino, tesorero de la Junta de Acción Comunal de su vereda, y firmante del acuerdo de sustitución colectiva de hoja de coca en el sur de Córdoba, fue asesinado en la vereda Nueva Ilusión, en San José de Uré.
3. El 6 de marzo de 2018, Arturo Royet, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Isabel, corregimiento Doradas, San José de Uré, fue asesinado por dos sujetos en la vía que conduce hacia Montelíbano.
4. El 10 de marzo de 2018, Tomás Barreto Moreno, miembro del Consejo Comunitario de Negritudes y sobrino de un concejal de San José de Uré, fue asesinado en la vereda El Can de su municipio.

4. Referencias

Departamento Nacional de Estadística (DANE). (2018). Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Recuperado de <https://bit.ly/2qx1rJK>

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2018). Indicadores y mediciones. Recuperado de <https://bit.ly/2GZxSve>

El Tiempo. (2018). “El cartel del Sinaloa estaría financiando a bandas criminales en Córdoba”. Recuperado de <https://bit.ly/2IV3Yor>

El Universal. (23 de febrero de 2018). “Grupos al margen de la ley están reclutando niños en Córdoba.” El Universal. Recuperado de <https://bit.ly/2ELVYUn>

Escuela Nacional de Geografía. Mapa de Córdoba. Recuperado de <https://sogeocol.edu.co/cordoba.htm>

García, E. (2017). “Tierralta es el que más cultivos ilícitos tiene en Córdoba: alcalde”. El Heraldo. Recuperado de <https://bit.ly/2qyLF0H>

Gobernación de Córdoba (2016). Plan de Desarrollo 2016-2019. Unidos por Córdoba. Recuperado de <https://bit.ly/2H0DEZq>

Gobernación de Córdoba. (2018). Geografía de Córdoba. Recuperado de <http://www.cordoba.gov.co/cordoba/geografia.html>

La W. (2017). “Las bandas criminales se estarán camuflando entre la población indígena, alcalde de Tierralta.” La W. Recuperado de <https://bit.ly/2zQzFzb>

Misión de Observación Electoral. (2007). Monografía Político Electoral DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 1997 a 2000.

Negrete V. (2008). Córdoba sin paz ni desarrollo. Recuperado de <http://viva.org.co/cajavirtual/svc012>

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. (2007). Diagnóstico departamental Córdoba. Recuperado de http://www.cordoba.gov.co/v1/docs/diagnostico_cordoba

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. (2009). Dinámica de la violencia en el departamento de Córdoba 1967-2008. Recuperado de <https://bit.ly/2qwH0x7>

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. (2002). Panorama actual del Paramillo y su entorno. Recuperado de <https://bit.ly/2Hl65ol>

Serrano, N. (2018). “Defensoría emite alerta por disputa de grupos armados en el sur de Córdoba”. El Universal. Recuperado de <http://www.eluniversal.com.co/regional/defensoria-emite-alerta-por-disputa-de-grupos-armados-en-el-sur-de-cordoba-272998>

UNCaribe. (2018a). Infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el Caribe colombiano: enero de 2018. Barranquilla. Recuperado a partir de <https://bit.ly/2vm2kun>

UNCaribe. (2018b). Infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el Caribe colombiano: febrero de 2018. Barranquilla. Recuperado a partir de <https://bit.ly/2vm2kun>

UNCaribe. (2018c). Infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el Caribe colombiano: marzo de 2018. Barranquilla. Recuperado a partir de <https://bit.ly/2vm2kun>

Verdad Abierta. (2008). Masacres 1997-2001. Recuperado de <https://verdadabierta.com/masacres-1997-2001/>

Verdad Abierta. (2018). "Asesinan a dos líderes en Casanare y Córdoba". Verdad Abierta. Recuperado de <https://verdadabierta.com/asesinan-a-dos-lideres-en-casanare-y-cordoba/>